

Datos del Expediente

Carátula: SOCIEDAD RURAL DE BARADERO C/ MUNICIPALIDAD DE BARADERO S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fecha inicio: 18/03/2026

N° de Receptoría: SN - 909 -
2025

N° de Expediente: SN - 5872 -
2026

Estado: Fuera del Organismo - En Juz.
Origen

Pasos procesales:

Fecha: 07/04/2026 - Trámite: SENTENCIA - (FIRMADO)

[Anterior](#)07/04/2026 9:53:50 - SENTENCIA[Siguiende](#)

REFERENCIAS

art 54 ley 14967.pdf [VER ADJUNTO](#)

Funcionario Firmante 07/04/2026 09:53:50 - SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ

Funcionario Firmante 07/04/2026 09:57:00 - CEBEY Damian Nicolas - JUEZ

Funcionario Firmante 07/04/2026 10:21:35 - MIÑON Ines - SECRETARIO DE CÁMARA

Nro. Notificación Electrónica 143843871

Nro. Notificación Electrónica 143843876

Observación CONFIRMA PARCIAL

-- NOTIFICACION ELECTRONICA

Fecha de Libramiento: 07/04/2026 13:02:32

Fecha de Notificación 07/04/2026 13:02:32

Notificado por IOMMI TAMARA LUJÁN

-- REGISTRACION ELECTRONICA

Año Registro Electrónico 2026

Código de Acceso Registro Electrónico DF48921D

Fecha y Hora Registro 07/04/2026 12:34:00

Número Registro Electrónico 53

Prefijo Registro Electrónico RS

Registración Pública SI

Registrado por SN\mimion

Registro Electrónico REGISTRO DE SENTENCIAS

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo Ordinario, con la integración de los Señores Jueces Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger, para dictar sentencia **definitiva** en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos "SOCIEDAD RURAL DE BARADERO C/ MUNICIPALIDAD DE BARADERO S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", en trámite bajo el n° SN-5872-2026, con arreglo al siguiente orden de votación: Cebey y Schreginger.

ANTECEDENTES

La sentencia apelada de fecha 29/10/2025.

Llegan los presentes autos a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes litigantes contra la decisión de la titular del JCA n° 1 del

Departamento Judicial San Nicolás que dispusiera: -

«...1°) *Acoger parcialmente la demanda actoral y, disponer que dentro del plazo de treinta (30) días de quedar notificada (J.C.A. N° 1 Trenque Lauquen, causa N° 16.809: "Berisso Francisco y otros c/ Municipalidad de Hipólito Yrigoyen s/ Amparo", sent. del 16/7/25; C.C.A. San Martín, sent del 04/09/25), deberá la Municipalidad de Baradero brindar la información pública requerida con los alcances detallados en el Considerando IV (de modo total los puntos 1, 2, 3, 9 y 10; parcialmente los rubros 4 y 5 y en caso de no satisfacerlo en el 1, también el 6) y allegar electrónicamente en autos, la documentación que la abastece o en su caso indicar expresamente la dirección URL (Localizador Uniforme de Recursos) para acceder a esa información específica (arts. 1 y 2 ley 12.475).*-

2°) *No hacer lugar a que la comuna demandada deba satisfacer la información pretendida en los puntos 7, 8, 11 y 12 del escrito de inicio por los fundamentos expuestos en el Considerando IV.*-

3°) *No acceder -a esta hora- a la imposición de astreintes en esta decisión (arts. 163 Const.prov. Bs As.; 63 C.P.C.A).- Atento a resolverse en definitiva, no se pondera la pretensión accesorio interpuesta.*-

4°) *Imponer las costas a la Municipalidad de Baradero, atento su calidad de vencida (art. 19 ley 13.928, texto según ley 14.192).* -

5°) *Regúlense los honorarios del Dr. Pablo Abdon TORRES BARTHE, en la cantidad de diez (10) Jus (arts. 10, 15 inc. "d", 16 inc. "e", 24, 28 inc. "b" y 54 ley 14.967, art. 20 bis, ley 13.928, incorporado por ley 15016 (Ac. S.C.B.A. N° 4200/25), con mas el porcentaje del art. 12 inc. "a", ley 6.716 y el I.V.A. de corresponder.- Con relación a los estipendios de los Letrados comparecientes por la Municipalidad accionada, procede estar al texto de los art. 203 y conchs. del dto. ley 6769/58...».*

Para así decidir, narra la *a quo* que se presenta el presidente de la persona jurídica actora e interpuso acción contra la Comuna de Baradero solicitando se la condene a entregar a la actora los documentos e información solicitados el día 16/03/2025.

Prosigue la *judicante* relatando la plataforma fáctica de la actora de la que surge que ésta representa y agrupa a productores y ciudadanos que están preocupados por los aumentos de la Tasa de Mantenimiento de Caminos Rurales y su estado por falta de mantenimiento, lo que les impide desarrollar su actividad y vida diaria. A esos efectos en fecha 16/03/2025 presentó una solicitud de información pública sin obtener respuesta alguna por lo que -pasados los treinta (30) días (cfr. artículo 7 de la Ley prov. n° 12.475)- entendieron denegado su pedido. Dice la actora -según relato de la *judicante*- que (de los datos que surgen de la propia página web del municipio respecto de la estimación de ingresos por la coparticipación del Impuesto Inmobiliario rural y de la Tasa de Red Vial; como así también de los egresos proyectados para el año 2025) sólo hay asignados para el mantenimiento vial (éjido urbano y zona rural) \$ 375.465.000, y que el total de \$823.384.600 que le aporta al municipio el sector rural es desviado a otros destinos que nada tiene que ver con ese sector. Cautelarmente solicita la reparación de caminos y congelamiento de tarifas, y que requirió la actora que se establezca un plazo razonable para el envío de la documentación requerida y la rendición de cuentas de las obras en curso, y que se impongan a la comuna sanciones conminatorias de carácter pecuniario por cada día de vencido ese plazo.

En presentación posterior, aclaró la actora que la ley que regula la cuestión de fondo es la Ley provincial n° 12.475, que regula el derecho a acceder a toda representación gráfica, fotocinematográfica, electromagnética, informática, digital o de cualquier otra especie, que contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado Provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la ley. Adunó que, a su entender, el Decreto reglamentario n° 2549/04 no se aplica a este caso, porque sólo refiere al acceso a la información pública de órganos o entes bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial y los municipios no entran en dicha categoría.

Así las cosas y una vez bilateralizada la acción, se presentan los apoderados de la Comuna demandada; tras efectuar las narrativas de rigor -narra la *iudex*-, refieren que la actora presentó una nota por mesa de entradas que dio origen al expediente administrativo n° 4009-20-2472 letra “S” 2025 y que esa petición fue respondida en fecha 22/04/2025 por el Secretario de Hacienda, Cdor. Federico Cataldo, en la que dijo que la totalidad de la documentación del Municipio de Baradero es de carácter pública; se presenta a control ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y todo lo que no esté subido a la web de la comuna <https://baradero.gob.ar/> o al Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, puede consultarse de manera particular por el solicitante. Agrega en su respuesta que la generalidad de la solicitud y la dificultad de reunir la documentación pretendida para su cotejo, hace necesario que la parte peticionante coordine con cada una de las áreas municipales el momento en que se presentará a ejercer su derecho a la información pública; que aclaró también que mucha de la información pedida -como transferencias bancarias o números de CBU de proveedores- se encuentra informatizada; es privada y sensible y que la persona jurídica requirente debía hacerse responsable civil y penalmente de cualquier inconveniente que pudiere ocasionarle a los emanantes el manejo de esa información. Señala que la actora nunca se presentó ni a ver la resolución de su expediente ni a consultar documentación alguna. En lo referente a la acción en sí, se explayaron los apoderados comunales en torno de la improcedencia del objeto de demanda, aclarando que la Ley prov. n° 12.475 reconoce a toda persona física o jurídica el derecho de acceso a documentos administrativos pero no contempla la entrega de documentación foliada/rubricada que pertenezca al municipio. Agregan que las solicitudes no tienen ningún fundamento lógico, sino que siguen un patrón antojadizo que ejemplifica. Con relación a las medidas cautelares, dice que éstas exceden el marco de este proceso, por lo que no merecen tratamiento ni debate.

Corrido nuevo traslado a la actora, la *a quo* señala que ésta contesta que el dictamen municipal del 22/04/2025 no le fue notificado por lo que desconocían su existencia, agregando que ni siquiera la Subsecretaria Legal y Técnica tenía conocimiento de la presentación administrativa, dado que el memorando presentado en autos por la propia demandada es de fecha 27/08/2025. Reconoció que -si bien el dictamen le fue favorable- nunca adquirió forma de resolución, ni se les notificó. En ese sentido, destaca que la acción es procedente. Explicó que solicitar rendiciones, balances y movimientos de cuentas oficiales no constituye un capricho, sino una manifestación de control ciudadano sobre la gestión de quienes están ejerciendo un mandato de administración.

Sentada así la posición de las partes, la Jueza se aboca a la decisión del conflicto.

Luego de tener por acreditada la legitimación de la actora, también tiene por probada la solicitud de información el día 10/03/2025 en la Municipalidad de Baradero, con resultado infructuoso por lo que presume agotada la vía administrativa, no siendo necesario que la actora coordine con cada una de las áreas municipales para ejercer su derecho a la información pública. Refiere la Jueza que -si bien el municipio alegó que desde el 22/04/2025 puso a disposición de la demandante la información solicitada, no acreditó haberle comunicado ello con anterioridad a comparecer en esta tramitación. En síntesis, señala que la demandada no le proporcionó la información requerida a la parte accionante ni en sede administrativa ni en sede judicial.

Cita jurisprudencia de la CSJN y de la SCBA que perfilan una interpretación amplia del derecho de acceso a la información pública.

Posteriormente, destaca que la actora no motivó de la misma manera su pedido en sede administrativa y en sede judicial, lo que destaca en alusión al principio de congruencia, pues corresponde -entiende la *judicante*- un análisis individualizado de los distintos accesos a diferentes documentos requeridos por la sociedad demandante, que congruentemente se relacionen con el objeto de su demanda, que es la denuncia de los aumentos desmedidos de la Tasa de Red Vial y el pésimo estado de mantenimiento y conservación que presentan los caminos rurales del Partido de Baradero que la motivación principal de esta acción conforme transcribe de la propia demanda.

Así las cosas, colige que es procedente el acceso a la información solicitada en los puntos: **1)** *Copia de los Balances correspondientes a los 48 meses, tanto de los balances anuales, como de los balances realizados mensualmente, y los anexos del mismo, libros de Ingresos y Egresos; 2) Copia Matriz de Costos utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fijan la tasa destinada al mantenimiento de caminos rurales, como asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz; 3) cantidad de kilómetros de todos los caminos rurales e infraestructura vial a mantener por esa comuna, detallando caminos secundarios y terciarios, ancho de los mismos, discriminados por zonas; 9) Las ordenanzas impositivas, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos en los términos del art. 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, para los ejercicios fiscales de los años 2023 y 2024 y 10) Informe cuales fueron las últimas 10 acciones de la comuna destinadas al mantenimiento de caminos rurales, detallando la tarea realizada, la ubicación, su costo y los empleados propios y/o tercerizados que participaron de la misma.*

Por otro lado, entiende la *judicante* que corresponde rechazar -por exceder el objeto de la controversia- el derecho de acceso a los documentos administrativos justificativos de los aumentos de la Tasa de Red Vial y el mantenimiento y conservación de los caminos rurales del Partido de Baradero: **7) Listado de Cheques emitidos por el Municipio de Baradero desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, consignando: Numero de Cheque, fecha de emisión, beneficiario, número de factura abonada con cada uno de ellos, monto y concepto por el cual se abona; 8) Listado de transferencias efectuadas desde la cuenta oficial del Municipio de Baradero desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, consignando: número de CBU de la cuenta a la que fuera realizada, fecha de la transferencia, beneficiario, número de factura abonada por cada una de ellas; detallando monto y concepto; 11) Copia matriz de costos utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fijan la tasa de recolección de residuos; como asimismo, presupuestos utilizados**

para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz y 12) Informe de qué manera se realiza la recolección de residuos en sus diferentes modalidades, radio de recolección, dotaciones e infraestructura disponible y su costo operativo.

Con relación al **punto 4)** del pedido de informe, afirma la sentenciante que deviene congruente que el municipio informe la cantidad de hectáreas que tiene el Partido de Baradero, pero no corresponde hacer lugar a la solicitud identificatoria de los propietarios de los inmuebles rurales porque la obligación del municipio en la contraprestación de la Tasa de Red Vial corresponde sea prestada a todos los caminos afectados por la misma. Trae a colación el artículo 226 inciso 6 del decreto ley n° 6769/58 que no contiene excepción alguna basada en el titular dominial, por lo que concluye que la Sociedad Rural de Baradero no está legitimada para solicitar información que hace a la propiedad privada de cada uno de los contribuyentes de la red vial, afirmando que son papeles privados sin que la Sociedad Rural de Baradero haya indicado el justificativo para acceder a ellos (cita artículos 17,18 y 19 de la CN y 10 de la CPBA), sin que la actora puede ampararse la Ley prov. n° 12.475 de rango inferior para alterar principios, garantías y derechos reconocidos por normas constitucionales.

En lo que refiere al **punto 5)** del pedido de informe, destaca la Magistrada que la Comuna sólo debe responder respecto de los caminos rurales pues el resto de la información no guarda congruencia con el objeto de demanda y la actora no fundó en su demanda ni motivó su pedido de informes con relación al resto de los conceptos solicitados en sede administrativa.

A su vez destaca la Jueza que -para el supuesto que, de los balances de ingresos y egresos requeridos, no surja la documentación que a continuación se detalla- deberá la Comuna suministrar lo pretendido en el **punto 6)** de demanda: Ingresos del Municipio de Baradero durante los últimos cuatro años, discriminando en cada uno de ellos: a) Conservación de la vía pública; b) Mantenimiento y conservación de fresado (RAP); c)- Ingresos por otros Impuestos y tasas urbanas; d) Contribuciones varias y su objeto; e) Fondos recibidos de la provincia de Buenos Aires en concepto de impuestos coparticipables y e) Fondos recibidos por cualquier otro concepto en el período señalado (Subsidios y/o aportes del gobierno Provincial o Nacional, etc.).

Por último, hace saber a la Comuna que la afirmación de que -en su página web oficial <https://baradero.gob.ar/boletin-oficial/>- se puede obtener la información requerida, la afirmación no es nítida tras una constatación de la Secretaria actuante puse no resulta accesible con facilidad encontrar las ordenanzas comunales, debiendo la Comuna indicar las direcciones URL pertinentes. Rechaza por el momento la aplicación de sanciones conminatorias.

El recurso de apelación de la Municipalidad de fecha 31/10/2025.

De la resolución relatada se agravia parcialmente la Comuna.

Como primer agravio, esgrime que la *a quo* no tomó en cuenta que el Municipio ya puso a disposición de la actora toda la documentación solicitada, más aún la mencionada como puntos 1, 2, 3, 9 y 10 y parcialmente 4 y 5 independientemente que la Sociedad Rural de Baradero haya decidido generar un pleito jurídico. Entiende que -desde el día 22/04/2025- la demanda dejó de tener sentido ya que la Comuna accedió a lo normado por la Ley prov. n° 12.475. Alude a que la Jueza de grado carga toda la responsabilidad a la Comuna sin tener en cuenta la inacción de la

sociedad actora. Destaca que -tanto en el expediente administrativo como en la contestación de demanda- se explicó la dificultad de poner a disposición de la actora la documentación pedida, sin embargo, se dejó claro que la misma podría ser requerida en las áreas pertinentes (cita artículos 3 y 4 de la Ley prov. n° 12.475). Dice que la imposición por parte de la *judicante* de la identificación de la URL específica para acceder a la información requerida es una interpretación que excede el marco normativo.

Como segundo agravio se queja de la imposición de las costas a su parte toda vez que la pretensión ha sido acogida de forma parcial e incluso rechazada la medida cautelar solicitada por la actora. A su vez, y con cita del artículo 19 de la Ley de Amparo (texto según Ley n° 14.192), señala que no se deberá condenar en costas si antes del plazo fijado para la contestación de demanda, cesara el acto u omisión que motivó el amparo.

Finalmente apela por altos los honorarios.

El recurso de apelación de la actora de fecha 06/11/2025.

Contra la resolución relatada también se alza la parte actora de forma parcial.

Postula extraño que la comuna prácticamente se haya allanado a informar todos los puntos requeridos y que, no obstante ello, la *a quo* limite el pedido de información. Expresa que la Jueza parte del error de confundir el contexto sobre la ruralidad y las tasas para el mantenimiento de los caminos rurales que se relató en la demanda, con el objeto mismo de la demanda; ello pues la demanda no estaba dirigida a solucionar el problema de los caminos rurales o las tasas que se abonan para su mantenimiento, sino que simplemente se solicitó información que su parte estima relevante para evaluar la situación y los manejos de la Municipalidad en materia de administración de recursos para luego evaluar los pasos a seguir.

Entiende que el principio de congruencia al que alude la sentenciante no debe buscarse en el contexto relatado y lo solicitado en la demanda sino que se encuentra entre lo solicitado en sede administrativa y lo solicitado en sede judicial, la que es la idéntica, sólo que -en la demanda interpuesta- se relató el contexto en el cual se solicitaba la información. Entiende que el punto 2 del resolutorio debe ser revocado, admitiendo el acceso a toda la información. Cita jurisprudencia para avalar su postura.

A su vez, apela por bajos los honorarios, teniendo en cuenta la calidad técnica del trabajo como así también lo novedoso de la cuestión traída a estudio que además ha tenido repercusión en la prensa especializada en materia agropecuaria y ha tenido trascendencia para casos futuros. Solicita, como mínimo, la suma de quince (15) jus.

La contestación actuarial de agravios (06/11/2025).

Corrido que fuera el debido traslado del memorial de agravios, se presenta la actora a intentar rebatir los argumentos.

Primeramente, insiste en que el dictamen al que hace referencia la Comuna nunca fue notificado fehacientemente a su parte.

Agrega que -sin perjuicio de la cita de la ordenanza general n° 267/80- el artículo referido también faculta al municipio a notificar en el domicilio del requirente, sin que sea obligación de las personas

comunes no habituadas al derecho el seguimiento cotidiano del expediente, sino que éstas son notificadas por medio de notificación fehaciente.

Endilga falta de sentido jurídico al recurso, pues si el municipio no se niega a presentar la información de manera clara, completa y precisa, podría presentarla en este mismo expediente, lo que haría culminar el pleito. Advierte que el Municipio no se hace cargo de la falta de claridad en la información pública obrante en la web y constatada por el Juzgado.

Sobre las costas y honorarios, señala que la *a quo* ha fijado en un cincuenta por ciento del máximo (20 jus) los honorarios de su letrado, por lo que esa parcela apelada carece de fundamentación por parte de la Comuna recurrente y debe ser inadmitida.

La contestación comunal de agravios (22/12/2025).

Corrido que fuera el debido traslado de los agravios, también se presenta a intentar rebatirlos la Comuna demandada.

En tal sentido, comparte la postura de la *judicante* en cuanto a que la Sociedad Rural no se encuentra legitimada para solicitar información que hace a la propiedad privada de cada uno de los contribuyentes, máxime cuando carece de sustento la información pedida, y que brindar dicha información iría en contrario a derechos constitucionales.

Por otra parte, también sostiene que la actora, al afirmar en su memorial que la Comuna "*prácticamente se ha allanado a informar todos los puntos requeridos*", da cuenta de la innecesariedad de la presente acción.

Su parte ratifica que la información requerida siempre estuvo disponible para la actora, bastando con concurrir al Municipio y cumplir con lo dispuesto por la Ley n° 12.475 sobre acceso a la información pública.

Menciona que -conforme surge del expediente administrativo-, en fecha 22/04/2025, se puso a disposición la documentación solicitada, con excepción de aquella de carácter privado y sensible, conforme lo prevé el artículo 6 de la Ley prov. n° 12.475 que cita y establece restricciones al acceso cuando la divulgación pueda afectar la privacidad o el honor de terceros.

Como corolario, expone que esta demanda se sustenta en una supuesta denegación de acceso a la información pública, generando gastos procesales innecesarios por la falta de voluntad de la actora de concurrir al Municipio, obtener copias y dar por concluido el asunto.

TRATAMIENTO

La Cámara estableció la siguiente CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

VOTACIÓN

A la cuestión, el Juez Cebey dijo: -

I.- A. Relatados de esa manera los antecedentes de la causa, corresponde primeramente realizar un encuadre jurídico de la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada.

Así, corresponde señalar que la CN, desde su Preámbulo y artículo 1, al igual que la CPBA, establecen el principio republicano de gobierno, del cual deriva la exigencia de publicidad de los

actos de las autoridades del Estado, tendiente a que los ciudadanos -como reflejo del ejercicio de la democracia- puedan conocer los actos de gobierno y controlar a sus representantes.

De ese modo, como regla general, toda persona ha de tener acceso a la información pública, derecho implícitamente previsto en los enunciados generales de los artículos 1 y 33 de la CN, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión consagrada en el artículo 14 y en algunos campos en los que la información es particularmente necesaria, como ser los partidos políticos (artículo 38), derecho ambiental (artículo 41) y derechos de los consumidores y usuarios (artículo 42).

A su vez, aquel derecho sustancial encuentra análoga consagración en diversos tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Ley Fundamental: artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En tal sintonía, la Constitución bonaerense prevé expresamente -en su artículo 12 inciso 4- el derecho a toda persona a la información y a la comunicación, el cual también encuentra eco tácito en los artículos 1, 11 y 38 de aquel estatuto fundamental.

A partir de esos postulados constitucionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido ampliando la órbita del derecho de todo ciudadano a acceder a la información en poder del Estado.

En ese sentido, como fuera sentado por entonces, la Corte Suprema de la Nación ha tenido oportunidad de señalar sobre el objeto de estudio -acceso a la información pública-, al haberse expedido el 4/12/12 en el precedente *"Asociación Derechos Civiles"* (Fallos: 335:2393), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *"Claude Reyes y otros vs. Chile"* (sent. del 19/9/06; Serie C, 151) había expresado que: «...la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 'buscar' y a 'recibir' 'informaciones', protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea» (cfr. párr. 77, sentencia internacional mencionada).

Destacó el alto tribunal federal que uno de los puntos a resaltar en la sentencia *"Reyes"* era el reconocimiento del *"principio de máxima divulgación"*, respecto del cual la CIDH -tras haber remarcado la relación existente entre el carácter representativo del sistema democrático- había enfatizado que: «(...) En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales

se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones» (cfr. párrafo 92 del caso citado); en tanto «(...) El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso» (cfr. párrafo 86, sentencia internacional referida).

Agregó el máximo tribunal nacional que el mencionado organismo jurisdiccional supranacional había observado en cuanto al sistema de restricciones que: *«(...) establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones (...) y que corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos» (...) «restricciones que deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo, escogiendo aquel que restrinja en menor escala el derecho protegido, proporcional al interés que la justifica y conducente para el logro del objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho» (cfr. párrafos 92 y 93, sentencia internacional mencionada).*

Posteriormente la Corte Suprema de esta República, al sentenciar el 10/11/2015 en los autos "Giustiniani" (Fallos: 338:1258), prosiguió por aquella senda y agregó que -conforme el referido caso Claude Reyes-: *«(...) el derecho de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto sino que puede estar sujeto a limitaciones. No obstante ello, tales restricciones deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. En efecto, el secreto solo puede justificarse para proteger un interés igualmente público, por lo tanto, la reserva solo resulta admisible para 'asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'».*

Más cerca en el tiempo, el 07/03/2019, el alto tribunal federal se pronunció en el marco de la causa "Savoia" (Fallos: 324:208) y expresó concordantemente que: *«...la carga de la prueba de la legitimidad de la restricción corresponde al Estado (conf. CIDH, Caso "Claude Reyes", antes citado, párrafo 93), y que cuando se deniega una solicitud de información debe hacerse mediante una decisión escrita, debidamente fundamentada, que permita conocer cuáles son los motivos y normas en que se basa para no entregar la información en el caso concreto (Fallos: 335:2393, considerando 9º; y 338:1258, considerando 7º; también CIDH, Caso "Claude Reyes", párrs. 77 y 158). En otras palabras, '...los sujetos obligados solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. De esta forma, se evita que por vía de genéricas e imprecisas afirmaciones, pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de información de interés público' (Fallos: 338:1258, considerando 26)».*

Ingresando ahora al ámbito local, corresponde señalar que se ha sancionado en la materia la Ley n° 12.475, reglamentada mediante el Decreto n° 2.549/04.

Dicha norma, ciertamente, se encuentra dirigida a la esfera de la Administración Pública provincial -Poder Ejecutivo- (cfr. artículo 2 del citado Decreto reglamentario), pero insta a su aplicación -como así también de todas las normas concordantes- en forma homogénea en todo el territorio provincial, promoviendo la adhesión de las Administraciones Públicas municipales a su espíritu y principios rectores (cfr. artículo 4 inciso "n" del mencionado Decreto).

Si bien no consta en autos que la comuna accionada haya ejercido esa facultad, considero que -de todos modos- las directrices de dicho plexo deben proyectarse al caso por vía de analogía. Ello, pues cabe recordar que -en supuestos de vacío jurídico como el señalado- nuestro cimero tribunal provincial ha sostenido que debe acudirse al auxilio del método de interpretación analógico cuando no exista norma expresa que rija el punto (cfr. artículos 171 de la CPBA y 2 del CCyC; doct. SCBA LP, causa B. 57.171, "*Castro Galván*", sent. del 21/06/2000).

En ese sentido, también se ha dicho que: *"El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coherentes que crean un universo de disposiciones reguladoras de la vida en sociedad. Si bien algunas de ellas son propias de cierto ámbito de las relaciones, no quita que por analogía, en principio, puedan emplearse para explicar otras situaciones en las cuales el sistema ha guardado silencio (art. 171, Const. Prov.)"* (cfr. CC0202 LP, causa n° 112.502, "*Wright*", sent. del 07/06/2016).

Superado ese obstáculo liminar, corresponde destacar que la referida Ley n° 12.475 ha reconocido el derecho de acceso a los documentos administrativos provenientes de los órganos del Estado provincial a quienes invoquen un interés legítimo (artículo 1).

Empero, esa expresión en modo alguno ha de ser interpretada de modo limitativo sino que corresponde ser armonizada con el contenido de los textos normativos de jerarquía superior aludidos en el punto que antecede, los que determinan el alcance jurídico del derecho.

Una hermenéutica adecuada impone considerar que la ley citada establece un piso mínimo de protección y, por lo tanto, no obsta la mayor extensión con que las facultades informativas han de ser reconocidas de acuerdo con otras fuentes normativas, amplitud que en cierto modo encuentra explicación en la redacción del propio Decreto reglamentario n° 2.549/04, en cuanto confiere a toda persona el acceso a documentos administrativos de naturaleza pública, sin haberse establecido la necesidad de alegar fundamento o causa ni acreditar derecho o interés alguno (artículo 4 y cc. del Anexo I).

En esa dirección ha elaborado la Suprema Corte provincial su doctrina legal en la materia, la que -debo remarcar- resulta de obligatorio acatamiento para los tribunales inferiores (cfr. arg. artículos 279 del CPCC y 25 de la Ley n° 13.928 y mod.), concordando sustancialmente con el criterio seguido por la Corte federal y que ha sido expuesto anteriormente.

Así, el alto tribunal bonaerense ha dicho que: *"La Constitución nacional, al igual que la Constitución provincial, establecen el principio republicano de gobierno (arts. 1° de ambos textos); una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer el desenvolvimiento gubernamental, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder. Así, por regla general, toda persona ha de tener acceso*

a la información pública" (cfr. SCBA LP, A. 72.274, "Albaytero", sent. del 09/03/16); y que: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado en materia de acceso a la información pública, la existencia de un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente" (cfr. SCBA LP, A. 73.729, "Marchesín", sent. del 22/08/2018).

De ese modo, la postura que mejor armoniza con el máximo rendimiento posible de los derechos y principios constitucionales en juego, es aquella conforme la cual la información generada o controlada por las autoridades estatales se presume pública y la carga de fundar una excepción a esa presunción ha de recaer sobre el ente gubernamental (cfr. doct. SCBA LP, causa A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", sent. del 29/12/2014, voto del Sr. Ministro Dr. Soria), por cuanto -como ya se ha indicado- el secreto sólo puede justificarse para proteger un interés igualmente público y, de allí, la reserva sólo resulta admisible para 'asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas' (en este sentido, ver artículos 2 y 6 de la Ley n° 12.475, y 3 y 6 del Anexo I del Decreto n° 2.549/04).

I.- B. En este marco, evoco lo expuesto por David Luban, en "El principio de publicidad": -

«...En el segundo apéndice de su ensayo 'La paz perpetua', Kant propone la siguiente 'fórmula trascendental del derecho público':

'Son injustas todas las acciones relativas al derecho de otros seres humanos si su máxima no es compatible con la publicidad'.

La relación entre esa fórmula y el artículo de fe de la Ilustración es relativamente directa. La publicidad permite a los ciudadanos someter 'las acciones relacionadas con el derecho de otros seres humanos' -que podríamos denominar 'las políticas públicas'- al escrutinio de su propio entendimiento. Si el artículo de fe ilustrado resulta correcto, este debate y escrutinio públicos son altamente deseables y la incapacidad de las políticas de soportarlos resulta sospechosa. Si, por otra parte, no es posible confiar en el entendimiento de los ciudadanos comunes, el buen gobierno e, inclusive, la justicia misma exigen mentiras piadosas. En ese caso, la fórmula de Kant resulta falsa.

Kant creía que su 'fórmula trascendental del derecho público' -el principio de publicidad, como lo denominaré en adelante- brindaría una prueba para determinar la corrección moral de la acción política de fácil aplicación, un 'experimento de la razón pura' que realizamos al preguntarnos, con respecto (prácticamente) a cualquier acción política: '¿Podría también hacer lo que hago si mi acción y mis motivos para emprenderla fueran de conocimiento público?'. Si la respuesta es negativa, la acción es injusta. John Rawls, el más eminente filósofo político kantiano contemporáneo, adopta esta 'condición de publicidad' como una 'restricción formal del concepto de lo justo' y la emplea en el argumento de su obra Teoría de la justicia (Rawls 1971, pp. 130 y 133).

La prueba de Kant no implica el requisito moral de que toda acción política sea efectivamente hecha pública. Se trata de una prueba de publicidad hipotética: Kant sólo hace alusión a la 'posibilidad' y la 'capacidad' de una máxima de soportar el conocimiento público pleno: Su 'experimento de la razón pura' es un experimento mental.

Resulta relativamente posible, por supuesto, que no seamos capaces de responder, únicamente a través del pensamiento, si una acción y su máxima podrían soportar la publicidad. Así, en muchos casos, el experimento intelectual podría no arrojar resultados determinados. Además, la prueba es puramente negativa. Kant pone cuidado en destacar que el sólo hecho de que una máxima pueda soportar la publicidad no demuestra por sí mismo que sea correcta: el principio de publicidad sólo establece que, si la máxima no tolera la publicidad, es injusta.

Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, el principio de publicidad constituye una proposición de moralidad pública notablemente potente y, de hecho, también de moralidad individual. Como vemos, descarta una variedad de principios y políticas que incluye desde ideas ampliamente aceptadas acerca del proceso judicial hasta las explicaciones utilitaristas de la moralidad, pasando por la posición de la Iglesia católica estadounidense acerca de la contención nuclear.

Además, el principio de publicidad no es sólo una proposición de moral, sino también un principio de diseño institucional. Supongamos que el principio de publicidad fuera falso: supongamos, en otras palabras, que en ocasiones las políticas justas fueran incompatibles con la publicidad. En ese caso, nos veríamos obligados a construir instituciones capaces de formular y ejecutar políticas, en gran medida, fuera del alcance del control del público, por temor a que un buen gobierno se vea subvertido por cierta presión pública desatinada o inmoral. Tendríamos que otorgar una buena medida de discrecionalidad al secreto oficial y movernos muy cautelosamente en la construcción de instituciones relacionadas con la supervisión y la responsabilidad (y es posible que este mismo hecho tuviese que considerarse confidencial). Si, por otra parte, el principio de publicidad es verdadero, dispondríamos de un argumento a favor del aumento de la responsabilidad pública y la apertura de las instituciones. En términos generales, la mejor manera de asegurarse que los funcionarios formulen políticas que sean capaces de tolerar la publicidad es aumentar la probabilidad de que las políticas se vean sujetas a la publicidad» (páginas 198 y ss., en "Teoría del Diseño Institucional", Robert E. Goodin compilador, Editorial Gedisa, Barcelona, primera edición, abril de 2003, ISBN 84-7432-852-7).

II.- Sentado lo anterior, corresponde abordar, a la luz de la hermenéutica jurídica que se desprende de las consideraciones vertidas, cuál es el alcance concreto de aplicación en el caso bajo examen, comenzando por los agravios del Municipio, pues de la suerte de éstos dependerá el abordaje -o no- del recurso actoral.

II.A.- Se agravia en primer término la Comuna porque no habría existido de su parte una negativa a brindar la información solicitada, pues existió una respuesta tanto en el expediente administrativo 4009-20-2472-2025 letra "S" como en la contestación de demanda.

Adelanto que este primer agravio no puede prosperar.

Según surge del expediente administrativo mencionado iniciado por la "Sociedad Rural de Baradero" solicitando acceso a la información pública, el que tengo a la vista [disponible en formato pdf en https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=6504d27d-f3f3-4520-a11d-39c873568b70&hash=BF04BACB3AA3FCFA6DC66055E08DB7BB&nombrepath=EXP_N1762472-2025pdf], el mismo cuenta únicamente con 6 fs. útiles y su última actuación es un dictamen favorable emitido por el Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas de fecha 22/04/2025, que -

en fecha 29/04/2025- ordena el pase a la Subsecretaría de Legal y Técnica, con lo que finalizan las constancias del expediente administrativo.

Cabe acotar que la *norma de facto* que continúa regulando el procedimiento ante los Municipios bonaerenses (salvo que éstos hayan dictado una Ordenanza a tales fines), ordenanza general n° 267/80, establece que «*El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, aguardándose riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza*» (artículo 48) y que «*La autoridad administrativa que tuviere a su cargo el despacho o sustanciación de los asuntos, será responsable de su tramitación y adoptará las medidas oportunas para que no sufran retraso*» (artículo 50).

Y también prevé que -en caso que no exista un plazo expresamente establecido en la normativa- las notificaciones deberán ser producidas dentro del plazo (máximo) de tres (3) días contados a partir de la recepción de las actuaciones por la oficina notificadora (artículo 77), y los restantes supuestos que contempla (que incluyen plazos para dictámenes, para «*decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al trámite del expediente...*» y para «*decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del interesado*»).

En la pieza a la que vengo de aludir, no obra constancia de notificación alguna al peticionante, sin que quepa imponer en cabeza del peticionante una suerte de *obligación o deber* de autonotificarse del contenido de las actuaciones pues ello implicaría sostener que el peticionante debería concurrir todos los días a la sede de la Comuna a imponerse de las novedades o movimientos que podría -o no- haber en su expediente administrativo. Una interpretación como esa, colisiona con el principio de informalismo a favor del administrado y el deber de notificación que recae en cabeza del Estado.

Bien señala Gordillo al abordar la obligación de notificar que «*...Para nosotros, acto administrativo es el que produce efectos jurídicos y como no puede producirlos sin publicidad (notificación), no existe "acto administrativo" productor de efectos jurídicos que sea tal sin notificación al interesado... Todo acto individual que la administración quiera que sea oponible a las partes, e incluso jurídicamente existente, tiene que notificarlo. No hay otra forma de quedar legalmente informado y ser oponible el acto, que mediante la notificación expresa, regular y válida...*» [cfr. Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo" https://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo5.pdf].

Y aún por si fuera poco, no es posible soslayar que no cabe sino asignar al último acto dictado en el marco del expediente 4009-20-2472-2025 letra "S" la naturaleza jurídica de un *dictamen*, preparatorio de la voluntad estatal, por cuanto -de su texto- no surge expresamente que resuelva la cuestión y lo haga saber al ciudadano peticionante e, inclusive, ordena el pase a otra dependencia de la Comuna a efectos de continuar el procedimiento.

En ese sentido, recuerdo que la jurisprudencia ha dicho que: -

«*...Un mero acto preparatorio de un acto administrativo acota su virtualidad a la esfera interna de la administración pero, al no producir efectos jurídicos directos en relación a los particulares, no es un acto administrativo...*» [cfr. "Latinconsult S.A. Proel Sudamericana S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Cobro de pesos" Cám. en lo Cont. Adm. y Trib. de la CABA, 10/9/2001, Id SAIJ: SUC2002062].

Por si ello no bastara, llega firme y sin cuestionamiento a esta instancia, la parcela del pronunciamiento que da cuenta de la constatación efectuada en la instancia de grado de que la información obrante en el sitio web <https://baradero.gob.ar/boletin-oficial/> no surge nítida ni fácilmente accesible; de allí que no pueda sostenerse que la mera remisión vía dictamen -itero, acto preparatorio- a las constancias obrantes en aquella dirección URL pueda ser considerada una respuesta adecuada a la petición efectuada que implique que la presente acción carezca de sentido, en los términos utilizados por la Comuna.

II.-b.- Advierto asimismo que la Administración intenta escudarse en la dificultad de poner a disposición la información requerida y que, por tal motivo, la posibilidad de requerir la misma a las áreas pertinentes abastece la petición de la actora.

Ahora bien, no puedo dejar de advertir que una interpretación así desvirtúa el principio de unidad de la Administración y pretende trasladar indebidamente al ciudadano la carga de comparecer ante cada una de las "áreas pertinentes" -si es que puede llegar a identificarlas- en el no siempre sencillo entramado burocrático del sector público. Esto rompe con los principio de rapidez, simplicidad y economía de los que nos habla Gordillo.

El distinguido autor aclara que: -

«...otros principios secundarios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal son el de la rapidez, simplicidad y economía procedimentales.⁶³ Ello significa que deben evitarse complicados, costosos o lentos trámites administrativos burocráticos que dificulten el desenvolvimiento del expediente. Es fundamental destacar que estos principios son secundarios respecto del principio del informalismo en favor del administrado, y que deben ser interpretados en forma congruente con él: No podrá, pues, disponerse una aceleración, simplificación o economía procesal que impliquen hacer riguroso el procedimiento, o perjudicar al administrado en su defensa...» [Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", https://www.gordillo.com/pdf_tomo5/03/03-capitulo2.pdf]

Nótese que -en líneas generales- estos principios son receptados por la Decreto n° 2549/04 reglamentario de la Ley prov. n° 12.475 en cuanto establece en su Anexo I: -

"ARTICULO 5°. Principios Generales. El procedimiento de acceso a documentos administrativos debe garantizar el respeto por los principios de publicidad, celeridad, informalidad, accesibilidad, igualdad y gratuidad."

"ARTICULO 9°. Accesibilidad. Los sujetos definidos en el Artículo 2° de este Reglamento General deben proveer a una adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un fácil y amplio acceso."

Máxime cuando -en el caso- la información se encuentra en diferentes áreas de la misma "dependencia oficial" (cfr. artículo 12 del Anexo I Decreto Reglamentario n° 2549/04), debiendo interpretarse aquel concepto como referido al ente oficial a que se requiera la información (v.gr. sociedad del Estado, empresa del Estado, entes autárquicos, etc.) sin que quepa discernir entre las distintas "áreas" en las que el ente pueda subdividirse (cfr. artículo 2 del Anexo I Decreto Reglamentario n° 2549/04).

II.-C.- En lo tocante al último aspecto de los agravios de fondo de la Comuna, vinculado con el exceso de jurisdicción en el que habría incurrido la *a quo* al solicitarle que allegue al proceso la

documentación requerida o bien indicar la dirección URL precisa para acceder a la información, tampoco puede prosperar.

En efecto, la *a quo* solicita al Municipio que presente la documentación o bien, si ésta se encuentra digitalizada en el dominio <https://baradero.gob.ar/boletin-oficial/>, indique de forma precisa el hipervínculo, ni más ni menos.

Es decir, la Comuna tiene la prerrogativa de presentar los documentos en el estado en que éstos se encuentren, de modo tal que no avizoro vulneraciones a la Ley prov. n° 12.475 (artículos 3 y 4) ni a su reglamentación según Decreto n° 2549/04 cuyo Anexo I dispone: -

"ARTICULO 19. Suministro de los documentos. Los documentos administrativos deben ser entregados en el estado en que se encuentren al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarlos o clasificarlos.

ARTICULO 20. Los sujetos comprendidos en el Artículo 2º de este Reglamento General no se encuentran obligados a crear o producir documentos, salvo que el Estado se encuentre obligado a ello, en cuyo caso deberá proveerlos."

III.- En lo que atañe al agravio vinculado con la imposición de costas y el monto de honorarios fijados a la actora, entiendo prudente analizarlos una vez examinado el recurso actoral.

IV.- Por su parte, el actor se agravia por la denegatoria de los siguientes puntos requeridos: -

"4)padrón de Propietarios de Inmuebles Rurales y Urbanos;

7) Listado de Cheques emitidos por el Municipio de Baradero desde el 1 de enero de 2024 a la fecha [10 de marzo de 2025], consignando: Numero de Cheque, fecha de emisión, beneficiario, número de factura abonada con cada uno de ellos, monto y concepto por el cual se abona;

8) Listado de transferencias efectuadas desde la cuenta oficial del Municipio de Baradero desde el 1 de enero de 2024 a la fecha [10 de marzo de 2025], consignando: número de CBU de la cuenta a la que fuera realizada, fecha de la transferencia, beneficiario, número de factura abonada por cada una de ellas; detallando monto y concepto;

11) Copia matriz de costos utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fijan la tasa de recolección de residuos; como asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz y;

12) Informe de qué manera se realiza la recolección de residuos en sus diferentes modalidades, radio de recolección, dotaciones e infraestructura disponible y su costo operativo".

Acoto aquí que -con relación a los puntos 7) y 8)-, dado que el actor no ha especificado fecha límite concreta, ésta ha de entenderse como referida a la fecha de la primera petición en sede administrativa, según así se desprende del punto *"I.- OBJETO"* del expediente administrativo n° 4009-20-002472 "S" [v. página 3 del pdf [https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=6504d27d-f3f3-4520-a11d-](https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=6504d27d-f3f3-4520-a11d-39c873568b70&hash=BF04BACB3AA3FCFA6DC66055E08DB7BB&nombrep=EXP_N1762472-2025pdf)

[39c873568b70&hash=BF04BACB3AA3FCFA6DC66055E08DB7BB&nombrep=EXP_N1762472-2025pdf](https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=6504d27d-f3f3-4520-a11d-39c873568b70&hash=BF04BACB3AA3FCFA6DC66055E08DB7BB&nombrep=EXP_N1762472-2025pdf)].

A la luz de la diferente naturaleza de cada uno de los pedidos, que se avizora a simple vista, corresponde deslindar el análisis de cada uno de los puntos propuestos.

IV.-A- Comenzando por el análisis del padrón de propietarios de inmuebles rurales y urbanos, adelanto que habré de compartir la decisión de la *a quo*.

Sin perjuicio del principio de interpretación amplia del derecho de acceso a la información, como dijimos al comenzar el análisis de la cuestión, entiendo que este derecho no es absoluto y debe necesariamente encontrar límites razonables para su ejercicio.

Así, sobre este punto factible es interpretar que la divulgación de información masiva y nominativa referida al patrimonio de una persona puede poner en riesgo su seguridad personal frente a posibles hechos de inseguridad, a la vez que no se trata de datos personales que obren en fuentes de acceso público irrestricto, pero a los que puede accederse a través de otros medios legales acreditando un interés legítimo [vgr. informes de dominio emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble, cfr. artículo 3 inciso 'j' y 'k' del Anexo I del Decreto n° 2549/2004 y artículo 5 inciso 2° apartado 'a' de la Ley n° 25.326]. En un sentido similar, la *a quo* fundó su decisión, en parte, en el derecho a la propiedad privada (cfr. artículo 17 CN), sin que -del memorial de agravios- se permita sostener una argumentación que conmueva los fundamentos de la *judicante* en este apartado.

IV.-b.- Seguidamente habré de analizar los supuestos enumerados como 7) y 8).

Así las cosas y conforme se desprende del expediente administrativo n° 4009-20-2472-2025 letra "S", el pedido procedimental denegado -y que motiva este proceso- es idéntico [v. página 3 https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=6504d27d-f3f3-4520-a11d-39c873568b70&hash=BF04BACB3AA3FCFA6DC66055E08DB7BB&nombreparch=EXP_N1762472-2025pdf] por lo cual -en virtud del principio amplio de acceso a la información pública- no cabe rechazar este pedido, toda vez que (fuera de los impedimentos de divulgación de la información, cfr. artículo 16 del Anexo I del Decreto n° 2549/2004 y Ley n° 25.326) la norma no prevé una fundamentación exigua del motivo, de la voluntad de conocer la información requerida, la que se presume por el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno (cfr. artículo 1 CN).

En tal sentido, si distintos proveedores deciden contratar con el Estado o prestarle sus servicios, mal podría alegarse que las operaciones efectuadas gocen de algún tipo de secreto comercial -al menos *a priori* y en tanto y en cuanto la prestación o servicio no se halle amparada en las limitaciones normativas-.

Ahora bien, sin perjuicio que la norma no prevé una fundamentación exigua de la petición, la falta de ese requisito no exime del control de la viabilidad del pedido cuando se advierta (al igual que aconteció con el punto 4) que la divulgación de la información puede implicar violaciones a las limitaciones impuestas por la Ley.

Así, considero que la identificación del CBU es un dato personal (cfr. artículo 2 de la Ley prov. n° 25.326) que merece protección y excede el marco del control del flujo de fondos de la Administración Pública, máxime cuando su divulgación podría dar pie a maniobras de ingeniería social que faciliten maniobras de fraude digital que puedan poner en juego la seguridad de las personas.

IV.-C.- Finalmente, con relación a los pedidos de los puntos 11) y 12), no advierto que en ellos puedan existir datos personales o sensibles que ameriten una limitación en el acceso a la información pública siguiendo la tesis amplia del principio de publicidad. Ello pues, itero, entre tanto no estemos frente a una limitación legal, el fundamento del derecho de acceso a la información

pública surge en sí mismo del principio publicidad de la forma republicana de gobierno (cfr. artículo 1 de la CN y artículo 1 de la CPBA) y sólo cuando aquel derecho entre en conflicto con limitaciones legales es que la tarea de fundar la petición ciudadana requiere de un esfuerzo argumental mayor que permita analizar si la excepción legal, en principio prevalente, no se ajusta al caso concreto.

V.- Resuelto entonces el fondo de la cuestión, corresponde retomar los agravios de la Comuna en torno de la fijación de costas y los honorarios fijados; esto último, recurrido por ambas partes.

V-A.-1.- Se agravia asimismo la Municipalidad por la imposición de las costas a su parte, sin contemplar -alude- que la demanda ha prosperado sólo parcialmente pues no se ha hecho lugar a la medida cautelar requerida, como así tampoco que ha dado efectiva respuesta al pedido de información pública antes del plazo de contestación de demanda.

En cuanto a la primera de las postulaciones, recuerdo que el principio contenido en el artículo 68 del CPCC (por remisión del artículo 25 de la Ley prov. n° 13.928 -t.s. Ley n° 14.192-, a la cual remite la Ley n° 12.475) debe interpretarse en el sentido de que las costas deben ser soportadas por la parte que resulte vencida en lo sustancial.

Así, se ha dicho que las «...costas de segunda instancia deben imponerse a la actora si el éxito obtenido en su apelación carece de la entidad necesaria para alterar el carácter de "sustancialmente vencida"...» [SCBA, LP, causa 104.889, sentencia 06/11/2013].

Por lo demás, y tal como se advierte del resultado del rechazo del recurso comunal, no es posible admitir que haya existido una efectiva respuesta al pedido de información pública antes del plazo de contestación de demanda, por lo que este argumento debe ser descartado de plano.

V-A.-2.- En cuanto a las costas de esta segunda instancia, no encuentro razones para apartarme del principio general que obliga a imponerlas en cabeza de la Comuna en tanto vencida en lo sustancial (cfr. artículos 68 del CPCC por remisión del 25 de la Ley prov. n° 13.928 -t.s. Ley n° 14.192- por remisión de la Ley n° 12.475).

V-B.- En tarea de analizar la regulación de honorarios del letrado patrocinante de la actora, recuerdo que la sentenciante dispuso: -

5°) Regúlanse los honorarios del Dr. Pablo Abdon TORRES BARTHE, en la cantidad de diez (10) Jus (arts. 10, 15 inc. "d", 16 inc. "e", 24, 28 inc. "b" y 54 ley 14.967, art. 20 bis, ley 13.928, incorporado por ley 15016 (Ac. S.C.B.A. N° 4200/25), con mas el porcentaje del art. 12 inc. "a", ley 6.716 y el I.V.A. de corresponder.- Con relación a los estipendios de los Letrados comparecientes por la Municipalidad accionada, procede estar al texto de los art. 203 y conchs. del dto. ley 6769/58...».

V-B.-1.- La Comuna accionada, ante tal acto regulatorio, señaló que los apelaba por altos (presentación del 31/10/2025).

V-B.-2.- Por su parte, el presidente de la institución actora, en representación de ella, dedujo apelación -exponiendo los argumentos reseñados en los antecedentes- por considerar bajos los honorarios regulados a su patrocinante.

Previo a todo análisis, corresponde el rechazo sin más de esta parcela del recurso actoral por carecer -la parte- de interés o agravio en esa materia (cfr. "Giorgi, Gustavo Rubén c/ Fisco de la provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria", expediente n° 2274, RSI de fecha 06/09/2016;

RHS 334-14, F° 443, expediente n° 11675 del Registro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial San Nicolás; artículo 10 decreto ley n° 8904/77, cfr. Larroza Taranto, *"Honorarios de Abogados y Procuradores..."*, página 91 n° 5, Ediciones Jurídicas).

Sobre este tema también se ha dicho: -

«Solamente podrán atacar una regulación de honorarios los letrados beneficiarios y los obligados al pago, no cabiendo otorgar el recurso que verse sobre el pedido de incremento de los emolumentos cuando no sea deducido por el abogado por derecho propio. También se ha señalado que el justiciable que no fue condenado en costas, no sólo carece de legitimación para cuestionar por bajos los emolumentos de su letrado patrocinante, sino que tampoco puede atacar la base regulatoria por las mismas circunstancias» [CC0102 MP 105642 38-R I 27/02/2018, *"Coinm SRL c/ Escaray Zapiola, Oscar s/ ejecución hipotecaria (hoy concurso especial)"*, Magistrados Votantes: Monterisi-Rosales Cuello].

Además: -

«Como el interés es la medida de la acción, el "gravamen o perjuicio" es la medida de la apelación. Sin interés no hay acción y sin perjuicio no hay recurso; por ende, la recurrente victoriosa no debe soportar los honorarios que se regularán sobre la base que establece el fallo en crisis, y por tanto carece de legitimación o interés jurídico tutelable para apelar por derecho propio la base regulatoria, porque de prospera lo pretendido se estaría contrariando su propio interés al elevarse considerablemente la misma -la cuantificación de los honorarios devengados- del proceso sólo en beneficio de los letrados actuantes» [CC0103 LP 237567 RSI-191-5 I 16/08/2005, *"Banco Municipal de La Plata c/ Marino, Fernando N. s/ cobro de pesos"*, Magistrados Votantes: Pérez Crocco-Lavié].

Y aún: -

«La parte actora, que además no ha sido condenada en costas, no tiene legitimación para cuestionar los honorarios por bajos de su letrado patrocinante ni atacar la base regulatoria» [CC0203 LP 101299 RSD-147-4 S 01/06/2004 Juez Billordo (SD), *"Mozzon, Ricardo Alberto y otros c/ Lavat, Javier Orgelio y otros s/ desalojo falta de pago"*, Magistrados Votantes: Billordo-Fiori].

V.-B.-3.- Sentado ello, siendo que la retribución del profesional debe guardar una relación de proporcionalidad con la actividad desarrollada, de acuerdo con el mérito, importancia y naturaleza de la labor desplegada, como así también la complejidad de la cuestión debatida y el tiempo empleado, considero que la crítica formulada por el Fisco debe ser rechazada.

Consecuentemente, corresponde confirmar los honorarios del Dr. Pablo A. Torres Barthe (T° 16 F° 169 CASM), letrado patrocinante de la parte actora, en la cantidad de 10 (diez) Jus; con más los aportes de ley e IVA si correspondiere (artículos 20 bis de la Ley n° 13.928, t.o. s. Ley n° 15.016; 1, 9, 14, 15, 16, 54 y cc. de la Ley n° 14.967; 1255 del CCyC y 12, 16 y 21 de la Ley n° 6.716).

V.-B.-4.- En tales condiciones y en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la ley arancelaria debe determinarse la remuneración correspondiente a los letrados intervinientes ante esta instancia.

Por ello, teniendo en cuenta el resultado propuesto en el presente voto, y de acuerdo con el mérito, importancia y naturaleza de la labor desplegada en esta Alzada, corresponde regular los

honorarios del Dr. Pablo A. Torres Barthe (T° 16 F° 169 CASM), letrado patrocinante de la parte actora, en la cantidad de 3 (tres) Jus; con más los aportes de ley e IVA si correspondiente (artículos 1, 9, 13, 14, 15, 16, 31, 49, 54 y cc. de la Ley n° 14.967; 20 bis de la Ley n° 13.928; 1255 del CCyC; 12, 16 y 21 de la Ley n° 6.716; Ac. 4190/25 SCBA).

Y, en lo que refiere a la actuación de los letrados representantes del Municipio, como bien señala la *a quo*, en solución que corresponde replicar en esta instancia, no corresponde regular emolumentos (cfr. artículo 203 del decreto ley n° 6769/1958).

ASÍ VOTO.

A la cuestión, el Juez Schreginger expresó: -

Compartiendo lo expuesto por el Juez Cebey, VOTO en idéntico sentido.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara **RESUELVE:**

- 1° Rechazar en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Baradero; -
- 2° Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, modificando parcialmente la resolución de grado de fecha 29/10/2025, conforme surge del voto que sustenta la presente; -
- 3° En virtud de lo resuelto en el apartado 2°, ordenar al Municipio a brindar: -
 - a) el listado de cheques emitidos por el Municipio de Baradero desde el 01/01/2024 a la fecha 10/03/2025 (según surge de petición efectuada en sede administrativa), consignando: Número de cheque, fecha de emisión, beneficiario, número de factura abonada con cada uno de ellos, monto y concepto por el cual se abona.

Siempre y cuando los conceptos de los servicios prestados por los proveedores no encuadren en alguna de las limitaciones del artículo 16 del Anexo I del Decreto n° 2549/2004, principalmente vinculada *"información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior"* o se trate de *"secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos"* (incisos 'c' y 'e'); o en otras excepciones legales;

- b) Listado de transferencias efectuadas desde la cuenta oficial del Municipio de Baradero desde el 01/01/2024 a la fecha 10/03/2025 (según surge de petición efectuada en sede administrativa), consignando: fecha de la transferencia, beneficiario, número de factura abonada por cada una de ellas; detallando monto y concepto;

Cuidando testar total o parcialmente el número de CBU de la cuentas a las que fueran realizadas, a efectos de preservar la privacidad de ese dato personal. Y, siempre y cuando los conceptos de los servicios prestados por los proveedores no encuadren en alguna de las limitaciones del artículo 16 del Anexo I del Decreto n° 2549/2004, principalmente vinculada *"información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior"* o se trate de *"secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos"* (incisos 'c' y 'e'); o en otras excepciones legales;

- c) Copia matriz de costos utilizada como fundamento para la aprobación de las ordenanzas que fijan la tasa de recolección de residuos; como asimismo, presupuestos utilizados para su confección, valores de referencia y demás documentación anexa en la que se base el cálculo consignado en dicha matriz y;

d) Informe la manera en que se realiza la recolección de residuos en sus diferentes modalidades, radio de recolección, dotaciones e infraestructura disponible y su costo operativo; -

4° Imponer las costas a la Comuna de ambas instancias, en tanto vencida en lo sustancial (artículo 19, Ley n° 13.928; artículo 68 CPCC); -

5° Rechazar parcialmente el recurso de apelación de la actora, en cuanto apela los honorarios regulados a su letrado patrocinante, confirmando la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado; -

6° Regular los honorarios del Dr. Pablo A. Torres Barthe (T° 16, F° 169, C.A.S.M.), letrado patrocinante de la parte actora, por su actuación en esta Alzada en la cantidad de 3 (tres) Jus; con más los aportes de ley e IVA si correspondiente (artículos 1, 9, 13, 14, 15, 16, 31, 49, 54 y cc. de la Ley n° 14.967; 20 bis de la Ley n° 13.928; 1255 del CCyC; 12, 16 y 21 de la Ley n° 6.716; Ac. 4190/25 SCBA).

7° En cuanto a la actuación de los letrados apoderados comunales, no corresponde regular emolumentos, en atención a la imposición de costas efectuada en ambas instancias (cfr. artículo 203 del decreto-ley n° 6769/1958)

Regístrese, y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. artículo 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) **con habilitación de días y horas y en carácter de urgente** (cfr. artículos 153 del CPCC; artículo 13 -segundo párrafo -Ac. SCBA 4013/21). Y oportunamente devuélvase.

Damián Nicolás Cebey Marcelo José Schreginger

Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).

municipalidad-baradero-legales@mbar.notificaciones

23236703819@notificaciones.scba.gov.ar

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----



SCHREGINGER Marcelo Jose
JUEZ

CEBEY Damian Nicolas
JUEZ

MIÑON Ines
SECRETARIO DE CÁMARA

[Volver al expediente](#) [Volver a la búsqueda](#) [Imprimir](#) ^